

Señor Juez  
JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI (Reparto)  
Santiago de Cali  
E. S. D.

Ref. : Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
Demandada : NACION – MINISTERIO DE DEFENSA -  
POLICIA NACIONAL  
Actor : AIDA ARBOLEDA VIUDA DE MARTINEZ

**CARLOS DAVID ALONSO MARTINEZ**, mayor de edad, domiciliado en Santiago de Cali, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pié de mi correspondiente firma, obrando como apoderado de la actora relacionado en la referencia, haciendo uso de la acción que contempla el artículo 138 del C.P.A.C.A., presento demanda ordinaria de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, representada por el señor General RODOLFO PALOMINO, Director General de la Policía o quién haga sus veces, en los siguientes capítulos:

## **1.0. DECLARACIONES Y CONDENAS**

- 1.1.** Declarase la nulidad del Oficio **Número 184881** de AGOSTO 26 DE 2011, por el cual la POLICIA NACIONAL, negó el reajuste salarial con fundamento al IPC señalados para los años 1.997, 1998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004 y siguientes.
- 1.2.** Como consecuencia de la declaración primera, condénese a la demandada a reconocer y pagar al actor el reajuste de la Pensión con la inclusión, en formula retrospectiva, de los incrementos salariales con fundamento al IPC señalados para los años 1.997, 1998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004 y siguientes hasta la fecha en que se adquiriera firmeza la sentencia que ponga fin al presente proceso, incorporando año a año los porcentajes establecidos por cada decreto, de manera que cada porcentaje se aplique sobre la base incrementada del año anterior de manera sucesiva.
- 1.3.** Como consecuencia de la declaración primera, condénese a la demandada a reconocer y pagar al actor **el retroactivo** de la pensión con la inclusión, en formula retrospectiva, de los incrementos salariales con fundamento al IPC señalados para los años 1.997, 1998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004 y siguientes, a partir de la vigencia de las citadas disposiciones en adelante hasta cuando se incluya en la nomina mensual la suma que corresponda al citado reajuste, pago que debe

ordenarse con la respectiva indexación, con los intereses moratorios sobre los dineros provenientes de ese reajuste en los porcentajes citados en el numeral 1.4. anterior como lo disponen los artículos 187, 188 y 189 del C.P.A.C.A.

- 1.4. Que se condene a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a reintegrar a la parte actora todas las sumas que se generen con el presente proceso, por concepto de honorarios de abogado y costas procesales.
- 1.5. Las sumas a las que sea obligada la demandada a pagar a mi poderdante serán actualizadas en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A., tomando como base el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, más los intereses comerciales y moratorios a que hubiere lugar.
- 1.6. Que la entidad demandada deberá cumplir la sentencia en los términos de los artículos 187, 188 y 189 del C.P.A.C.A.
- 1.7. Que se ordene el pago de las costas procesales y agencias en derecho.

## 2.0. HECHOS

- 2.1. **PRESTACIONES PERIODICAS:** AIDA ARBOLEDA VIUDA DE MARTINEZ, por el fallecimiento del señor MARCO ARNUBIO MARTINEZ HERRERA, quien se identificaba con cedula **2674212**, viene devengando Pensión pagadera por la demandada POLICIA NACIONAL, tal como lo confirma la propia demandada en el acto administrativo que se impugna.
- 2.2. **INCREMENTO SALARIAL IPC- RÉGIMEN EXCEPCIONADO:** El Congreso de la República mediante artículo 279 de la ley 100 de 1.993 dispuso como régimen de excepción al personal de la Fuerza Pública en materias salarial y el mismo Congreso de la República mediante ley 238 de 1.995 dispuso que dicha excepción no aplicaba con relación a los derechos y beneficios determinados en los artículos 14 y 142 de la ley 100 de 1.993, es decir, la excepción hecha en el artículo 279 de la ley 100 de 1.993 fue acertadamente condicionada por la ley 238 de 1.995, en el sentido de que la excepción no aplicaba para asuntos relacionados con pensiones, traduciendo lo anterior que los incrementos salariales para la pensiones deben darse con fundamento al IPC.

- 2.3.** Así mismo la inconformidad radica en el hecho de que la Policía Nacional negó a mi poderdante los incrementos salariales de la generalidad del sector consiguiendo de tal proceder que mi poderdante pierda poder adquisitivo de su pensión en el equivalente al **15.42%**, como sumatoria de los incrementos aplicados para los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003 y 2.004, que aplicados a valores constantes equivale a la pérdida de un valor en el equivalente a **\$122.696.6** pesos mensuales, sin ninguna razón de orden legal para tal proceder.
- 2.4.** No se compadece con la **Justicia y la Equidad** el hecho de someter a un PENSIONADO, a disposiciones legales que hablan de incrementos salariales para una población que no va más allá de 500.000 empleados entre empleados y pensionados, y que esas disposiciones estén por debajo de los incrementos salariales aplicados para el SALARIO hasta por el 15% de los incrementos salariales aplicados a una clase trabajadora.

### **3.0. NORMAS VIOLADAS**

- 3.1.** Arts. 2, 4, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional.
- 3.2.** Ley 4 de 1.992.
- 3.3.** Ley 238 de 1.995.
- 3.4.** Decretos 0122 de 1.997, 0058 de 1.998, 0062 de 1.999, 2724 de 2.000, 2737 de 2.001, 0745 de 2.002, 3552 de 2.003 y 4158 de 2.004.
- 3.5.** Decretos 2334 de 1.996, 3106 de 1.997, 2560 de 1.998, 2647 de 1.999, 2579 de 2.000, 2910 de 2.001, 3232 de 2.002 y 3770 de 2.003.
- 3.6.** Ley 923 de 2.004.

### **4.0. CONCEPTO DE LA VIOLACION**

- 4.1. VIOLACION CONSTITUCION NACIONAL:** El párrafo del artículo 2 de la C.P. preceptúa los deberes y responsabilidades de las autoridades, dentro de las cuales está la de proteger a las personas en su vida, honra y bienes. Resulta que uno de los pocos bienes materiales con que cuenta el actor para su subsistencia es la pensión, el cual se ha visto menguado con la negativa de reconocer el reajuste que mediante esta demanda se impetra, no obstante aparecer clara la obligación de pagarla.

El trabajo se encuentra garantizado plenamente en los artículos 25 y 53 de la Carta. Dado que la pensión de que goza el actor es una consecuencia de la relación laboral que existió con el Estado, este debe concretar las garantías consagradas en las normas citadas, en especial aplicando un criterio favorable en la interpretación de las normas que regulan el derecho demandado.

**4.2. VIOLACION DERECHOS ADQUIRIDOS – IPC:** El Congreso de la República mediante artículo 279 de la ley 100 de 1.993 dispuso como régimen de excepción al personal de la Fuerza Pública en materias salarial y el mismo Congreso de la República mediante ley 238 de 1.995 dispuso que dicha excepción no aplicaba con relación a los derechos y beneficios determinados en el artículo 14 *(Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.)* y artículo 142 *(mesada adicional para ... pensionados)* de la ley 100 de 1.993, es decir, la excepción hecha en el artículo 279 de la ley 100 de 1.993 fue acertadamente condicionada en el sentido de que la excepción no aplicaba para asuntos relacionados con pensiones, y la Sentencia C-432 de 2.006 expedida por la Corte Constitucional dispuso que las Asignaciones de Retiro de la Fuerza Pública se asimilan a pensiones (12. .... **Es una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez**), traduciendo lo anterior que los incrementos salariales para la pensión deben darse con fundamento al IPC que resultan más desfavorable como sucedió, por cuanto el referido incremento se encuentra por debajo del incremento salarial identificado para la generalidad del sector, lo que constituye una clara discriminación y un atentado contra el poder adquisitivo protegido por el artículo 48 de la Constitución Nacional.

**4.2.1. NACIMIENTO DEL DERECHO AL INCREMENTO SALARIAL CON BASE AL IPC.** En cuanto al derecho del incremento salarial, con fundamento al IPC, nace a la vida jurídica con fundamento a la Ley 238 de 1.995 que dispone: ARTICULO 1o. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente párrafo: "Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados".

El Artículo 14 de la Ley 100 de 1.993 dispone: Con el objeto de que las **pensiones**

de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Lo anterior traduce, **una vez más**, que a los miembros de la Fuerza Pública, por ley, sus incrementos salariales deben darse como mínimo con los factores del **IPC**, de lo contrario se violaría los principios rectores dispuestos en el artículo 2 de la Ley 923 de 2.004, (Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios) y del artículo 2.7 de la misma ley que dispone: No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro o pensión o sustitución.

Son razones de más para solicitar la aplicación de los factores salariales en el incremento salarial dado a mi poderdante desde el año 1.997 y años siguientes hasta la presente fecha, CON FUNDAMENTO AL IPC desde el año 1.997y años siguientes hasta la presente fecha.

**4.2.2. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE OSCILACION:** Para el presente caso el Principio de oscilación se encuentra dispuesto en el Artículo 3.13. de la Ley 923 de 2.004 y en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2.004, al siguiente orden:

La Ley 923 de 2.004 dispone:

3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.

El Decreto 4433 de 2.004 dispone:

Artículo 42. *Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión.* Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado.

En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.

El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.

Con relación al **PRINCIPIO DE OSCILACION** se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia c-432 de 2.004 al siguiente orden:

11. Visto el fundamento y el fin constitucional que se persigue con la creación, desarrollo y regulación de un régimen especial prestacional para los miembros de la fuerza pública, procederá esta Corporación a dar respuesta al otro interrogante planteado, es decir, ¿en qué consiste -en concreto- dicho régimen prestacional especial?

**Para iniciar es preciso aclarar que el carácter especial se contrapone a los calificativos excepcional y autónomo, en torno al ámbito de la aplicación de un régimen normativo en un determinado ordenamiento jurídico. Así, lo reconoce la doctrina, al establecer que el derecho excepcional es aquel régimen normativo que supone la existencia de otro -de mayor alcance y jerarquía- frente al cual se introducen derogaciones, subrogaciones o modificaciones en aspectos puntuales.** Es *derecho autónomo* el conjunto de disposiciones jurídicas que dependen de sí mismas y se encuentran sujetas a sus propios principios generales. Finalmente, es *derecho especial* aquel régimen normativo que, sin llegar a ser autónomo, supone una regulación separada y libre de una materia independiente, que responde a una cierta y exclusiva individualidad técnica y económica.

Se puede entonces considerar que un *régimen prestacional especial* es aquel conjunto normativo que crea, regula, establece y desarrolla una serie o catálogo de prestaciones a favor de un grupo social determinado que, a pesar de tener su origen en un derecho general o de mayor entidad, goza de una regulación propia, en virtud de ciertas características individuales que le dotan de plena singularidad.

La existencia de un régimen especial prestacional de seguridad social, implica la imposibilidad de someter a sus beneficiarios al sistema normativo general (Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003). Por el contrario, su especialidad conduce a crear o regular distintas modalidades de prestaciones que permitan reconocer el fin constitucional que legitima su exclusión del sistema general, es decir, **es indispensable adoptar medidas de protección superiores**, en aras de propender por la igualdad material, la equidad y la justicia social de las minorías beneficiadas con la especial protección prevista en la Constitución. (Resaltado y Subrayado fuera del texto)  
Precisamente dentro de las exclusiones del sistema general de seguridad social, se encuentran previstos los miembros de la fuerza pública. Dispone el artículo 279 de la Ley 100 de 1993:

*“Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas (...).”*

En este contexto, como lo ha sostenido esta Corporación, dicho tratamiento diferencial debe estar encaminado a mejorar las condiciones económicas del grupo humano al cual se aplica, por lo que resultan inequitativos, es decir, contrarios al principio de igualdad, “los regímenes especiales de seguridad social que introducen desmejoras o tratamientos de inferior categoría a los concedidos por el régimen general”. (Resaltado y Subrayado fuera del texto)

En relación con lo expuesto, esta Corporación en Sentencia C-461 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo que:

*“(...) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cubre. **Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta (...)**”*. (Resaltado y Subrayado fuera del texto)

De lo expuesto podemos concluir que la existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, en aras de equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo período de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente.

Pero no se trata de reconocer privilegios o prerrogativas que desborden el contenido prestacional de la garantía a la seguridad social, es decir, la regulación especial que para el efecto establezca, debe enmarcarse dentro del fin constitucional que cumplen los preceptos superiores que la autorizan (C.P. artículos 150, numeral 19, literal e) y 217 y 218), y, además, debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. En esta medida, dichas prestaciones resultan razonables y proporcionales si permiten nivelar a los miembros de la fuerza pública con el resto de servidores del Estado, a través del señalamiento de derechos prestacionales que repongan el desgaste físico y emocional a que se someten los primeros, principalmente en razón de sus servicios. De lo contrario, esto es, si el objetivo de la prestación desborda los citados límites, el reconocimiento de dicha prestación resulta inconstitucional, pues otorga un beneficio carente de una causa constitucional real y efectiva.

**4.2.3.** Así pues, resulta que los AJUSTES SALARIALES aplicados a la Fuerza Pública y que se encuentren por debajo de los **IPC** desde 1997, violan los principios de igualdad y equidad señalados en la Ley 923 de 2.004.

En el presente caso, tanto en el agotamiento de la vía gubernativa como en las pretensiones de la demanda y su concepto de violación, la discusión jurídica planteada está relacionada con la violación del PRINCIPIO DE IGUALDAD y EQUIDAD frente al factor salarial **I. P. C.** que trata el DANE, en razón a que este último, en materia salarial, no le fue aplicado a ningún sector de la sociedad y segundo porque por si solo el referido factor no genera vigencia fiscal legal y por consiguiente no genera responsabilidad el Estado, a no ser, que, una autoridad judicial disponga una vigencia fiscal que genere gasto publico.

**4.2.4.** En la tabla que sigue se presentan las diferencias entre los factores del **I. P. C.** certificado por el DANE para cada uno de los años desde el año 1.997 hasta el año 2.006 y los factores del incremento salarial dispuesto por el Gobierno Nacional para el Personal de la Fuerza Pública, desde el año 1.997 hasta el año 2.006, teniendo en cuenta que para el año 1.997 se tuvo en cuenta el **I. P. C.** del año 1.996 y así sucesivamente año por año hasta el año 2.006 que se tuvo en cuenta el **I. P. C.** del año 2.005, con una diferencia dejada de cancelar del 16.63%, es decir, se identifica la no recuperación de la perdida de la inflación causada, al siguiente orden:

| DIFERENCIA PORCENTUAL |                           |                           |        |         |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------|
| AÑO                   | OSCILACIÓN                |                           |        | IPC     |
|                       | DECRETO                   | DECRETO                   | %      | %       |
| 1997                  | D- 31 (9 de enero)        | D- 122 (16 de enero)      | 10.16% | 21,63%  |
| 1998                  | D- 40 (10 de enero)       | D- 58 (10 de enero)       | 23.80% | 16.02%  |
| 1999                  | D- 35 (8 de enero)        | D- 062 (8 de enero)       | 14.91% | 16.70%  |
| 2000                  | D- 2770 (27 de diciembre) | D- 2724 (27 de diciembre) | 9.23%  | 9.23%   |
| 2001                  | D- 2710 (17 de diciembre) | D- 2737 (17 de diciembre) | 4.18%  | 8.75%   |
| 2002                  | D- 660 (10 de abril)      | D- 745 (17 de abril)      | 4.85%  | 7.65%   |
| 2003                  | D- 3535 (10 de diciembre) | D-3552 (10 de diciembre)  | 4.87%  | 6.99%   |
| 2004                  | D- 4150( 10 de dicimbre)  | D- 4158 (10 de diciembre) | 4.68%  | 6.49%   |
| 2005                  | D- 916 (30 de marzo)      | D- 0923 (30 de marzo)     | 5.50%  | 5.50%   |
| 2006                  | D- 372 (8 de febrero)     | D- 0407 (08 de febrero)   | 5.00%  | 4.85%   |
| Total                 |                           |                           | 87.18% | 103.81% |

Sobre el particular se pronuncio la Corte Constitucional al siguiente orden:

**11.** Visto el fundamento y el fin constitucional que se persigue con la creación, desarrollo y regulación de un régimen especial prestacional para los miembros de la fuerza pública, procederá esta Corporación a dar respuesta al otro interrogante planteado, es decir, ¿en qué consiste -en concreto- dicho régimen prestacional especial?  
(...)



La existencia de un régimen especial prestacional de seguridad social, implica la imposibilidad de someter a sus beneficiarios al sistema normativo general (Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003). Por el contrario, su especialidad conduce a crear o regular distintas modalidades de prestaciones que permitan reconocer el fin constitucional que legitima su exclusión del sistema general, es decir, **es indispensable adoptar medidas de protección superiores, en aras de propender por la igualdad material, la equidad y la justicia social de las minorías beneficiadas con la especial protección prevista en la Constitución.** (Resaltado y Subrayado fuera del texto)

Precisamente dentro de las exclusiones del sistema general de seguridad social, se encuentran previstos los miembros de la fuerza pública. Dispone el artículo 279 de la Ley 100 de 1993:

*“Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas (...)”.*

En este contexto, como lo ha sostenido esta Corporación, dicho tratamiento diferencial debe estar encaminado a mejorar las condiciones económicas del grupo humano al cual se aplica, **por lo que resultan inequitativos, es decir, contrarios al principio de igualdad, “los regímenes especiales de seguridad social que introducen desmejoras o tratamientos de inferior categoría a los concedidos por el régimen general”.**

En relación con lo expuesto, esta Corporación en Sentencia C-461 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo que:

*“(...) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cubre. **Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta (...)**”.* (Resaltado y Subrayado fuera del texto)

De lo expuesto podemos concluir que la existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, en aras de equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo período de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente.

Pero no se trata de reconocer privilegios o prerrogativas que desborden el contenido prestacional de la garantía a la seguridad social, es decir, la regulación especial que para el efecto establezca, debe enmarcarse dentro del fin constitucional que cumplen los preceptos superiores que la autorizan (C.P. artículos 150, numeral 19, literal e) y 217 y 218), y, además, debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. **En esta medida, dichas prestaciones resultan razonables y proporcionales si permiten nivelar a los miembros de la fuerza pública con el resto de servidores del Estado, a través del señalamiento de derechos prestacionales que repongan el desgaste físico y emocional a que se someten los primeros, principalmente en razón de sus servicios. De lo**

contrario, esto es, si el objetivo de la prestación desborda los citados límites, el reconocimiento de dicha prestación resulta inconstitucional, pues otorga un beneficio carente de una causa constitucional real y efectiva. (Resaltado y Subrayado fuera del texto)

**4.2.5.** La inconformidad sobre el particular radica en el hecho de que los incrementos salariales aplicados a mi poderdante en los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, y 2.004, siempre han estado muy por debajo de los incrementos salariales hechos a la generalidad del sector consiguiendo de tal proceder que mi poderdante pierda poder adquisitivo de su pensión en el equivalente al **15.42%**, como sumatoria total de los años que se citan, que aplicados a valores constantes equivale a la pérdida de un valor en el equivalente a **\$122.696.6** pesos mensuales, que multiplicados por las 14 mesadas de un año, son el equivalente de **\$1'717.752.4** pesos, sin ninguna razón de orden legal para tal proceder.

## **5.0. MEDIOS DE PRUEBA:**

- 5.1.1.** Original del Poder para actuar.
- 5.1.2.** Oficio 184881 de AGOSTO 26 DE 2011 cuya anulación se demanda.
- 5.1.3.** Original del derecho de petición de agotamiento de vía gubernativa

## **6.0. CUANTÍA, COMPETENCIA y PROCEDIMIENTO**

**6.1. CUANTÍA:** Atendiendo el Artículo 157 del C.P.A.C.A. relacionado con la Competencia por razón de la cuantía, en el sentido de que: **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.** El Honorable Juez Administrativo es competente para conocer de la presente acción, ya que se trata de una nulidad y restablecimiento del derecho, de carácter laboral, no provenientes de contratos de trabajo, por la cuantía que al momento de la acción asciende a la suma de **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (21'975.954) PESOS** moneda legal Colombiana, razonada así desde la fecha en que se produjo el derecho al reconocimiento y pago del IPC con fundamento a los valores existentes en tres años a 14 meses por año para un total de 42 meses de retroactivo, teniendo en cuenta la asignación mensual de: **AIDA ARBOLEDA VIUDA DE MARTINEZ**, es según los siguientes cuadros:

**6.1.1. ESTIMACION CUANTIA INCREMENTO SALARIAL IPC:** Para identificar el factor y determinar la cuantía relacionada con el incremento salarial se hace necesario identificar la fecha de retiro del actor para determinar el factor dejado de cancelar año por año siguiente a partir del año 1.997 de acuerdo al siguiente cuadro:

| AÑO   | Valor<br>Asignación<br>de retiro | Variación<br>incremento<br>asignación | Variación IPC<br>año anterior art.<br>14 ley 100 | Asignación que<br>debió pagar con<br>reajuste IPC | DIFERENCIA   |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|
| 1996  | \$362.042.78                     | 27.69%                                | 19.46%   |   |              |
| 1997  | \$430.356.21                     | 18.86%                                | 21.63%   | \$440.352.63                                      | \$78.309.85  |
| 1998  | \$507.668.10                     | 17.96%                                | 17.68%   | \$519.439.96                                      | \$79.087.33  |
| 1999  |                                  | 14.91%                                | 16.70%   | \$606.186.43                                      | \$86.746.47  |
| 2000  | \$637.207                        | 9.23%                                 | 9.23%  | \$662.137.43                                      | \$55.951.00  |
| 2001  | \$694.556                        | 9.00%                                 | 8.75%  | \$721.729.79                                      | \$59.592.36  |
| 2002  | \$736.229                        | 5.99%                                 | 7.65%  | \$776.942.11                                      | \$55.212.32  |
| 2003  | \$787.768                        | 7.00%                                 | 6.99%  | \$831.328.05                                      | \$54.385.94  |
| 2004  | \$838.894                        | 6.48%                                 | 6.49%  | \$885.281.24                                      | \$53.953.19  |
| Total |                                  | 99.16%                                | 114,58%  |   | \$523.237.52 |

Seguidamente se toma el factor **15.42%** que identifica el valor **\$523.237.52** y se multiplica por el tiempo retroactivo dejado de cancelar, al siguiente orden:

| Año                                       | %Incremento<br>Salarial | factor<br>mensual | Valor<br>Anual      |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Septiembre 2.011- Septiembre 2.012</b> | <b>\$ 523.237.52</b>    | <b>15.42%</b>     | <b>\$ 7'325.318</b> |
| <b>Septiembre 2.012- Septiembre 2.013</b> | <b>523.237.52</b>       | <b>15.42%</b>     | <b>\$ 7'325.318</b> |
| <b>Septiembre 2.013- Septiembre 2.014</b> | <b>523.237.52</b>       | <b>15.42%</b>     | <b>\$ 7'325.318</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>.....</b>            |                   | <b>\$21'975.954</b> |

NOTA: Para hacer estos cálculos se han tomado catorce (14) mesadas anuales, incluyendo las mesadas adicionales de Junio y Diciembre de cada año.

**6.2. COMPETENCIA:** De lo visto se colige que es usted competente señor juez por ser inferior su cuantía al valor de cien (100) salarios mínimos mensuales, preceptuado en la ley 446 de 1.998. El procedimiento es el indicado en el libro 4o. Del título 24, artículos 206 y demás normas legales concordantes.

### 7.0. MEDIDAS PREVIAS

**7.1.** Comedidamente solicito al Honorable Magistrado Sustanciador, se sirva allegar, previamente al auto admisorio de la demanda, en virtud de oficio dirigido al señor

Director General de la Policía Nacional, dependencias ubicadas en la Transversal 45 Nro. 40-11 C.A.N. Bogotá D. C., a donde le ruego dirigirse solicitando copias debidamente autenticadas de:

A. Expediente administrativo y la hoja de servicios de **MARCO ARNUBIO MARTINEZ HERRERA**

## **8.0. NOTIFICACIONES**

- 8.1.** El actor y el suscrito apoderado recibiremos notificaciones en la Secretaria del Tribunal o en la carrera 2 Norte numero 21-59 Segundo Piso, barrio Piloto Cali Valle, teléfono: 8811093, 8855566 de Santiago de Cali. Correo electrónico: carlosdavidalonsom@gmail.com
- 8.2.** El Director de la Policía Nacional en sus oficinas de la carrera 3N No. 24N-16 en Cali - Valle. correo electrónico de la policía [deval.notificacion@policia.gov.co](mailto:deval.notificacion@policia.gov.co)
- 8.3.** El director de la agencia nacional de defensa jurídica del estado en la Cll 70 NO 4 -60, TEL: 2558955 de Bogotá, Correo electrónico: [agencia@defensajuridica.gov.co](mailto:agencia@defensajuridica.gov.co)  
[procesos@defensajuridica.gov.co](mailto:procesos@defensajuridica.gov.co)

## **9.0. ANEXOS**

- 9.1.** Original del poder para actuar con constancia de presentación personal.
- 9.2.** Copia de la resolución cuya anulación se solicita.
- 9.3.** Cinco (5) copias de esta demanda con anexos para traslados y archivos del Juzgado Administrativo.

**Atentamente,**

**CARLOS DAVID ALONSO MARTINEZ**  
CC. 1.130.613.960 de Cali  
T.P. 195.420 del C.S.J.